

JOEL ANDREAS

## SINO-SISMOLOGÍA\*

Cada semana se publican nuevas noticias sobre revueltas populares en China. Los campesinos expulsan a los funcionarios de los pueblos en protesta por la corrupción y el comercio ilegal de terrenos; los trabajadores inmigrantes hacen huelga para exigir salarios que les permitan sobrevivir; los trabajadores despedidos ocupan fábricas estatales privatizadas; las minorías étnicas protestan contra los privilegios de los Han; los residentes del campo y la ciudad luchan para lograr el cierre de plantas que polucionan, etc. Según las cifras del gobierno, en 2006 hubo unos 90.000 «incidentes de masas», cuando en 1993 sólo se registraron 9.000. Si bien hay toda una serie de causas que lo explican, los comentaristas de la República Popular China y el extranjero han vinculado la creciente agitación al aumento de la desigualdad económica. En las dos últimas décadas, a medida que el Partido Comunista ha ido implementando un mercado de estilo capitalista, los estratos superiores de la sociedad china se han enriquecido notablemente, incluso para los estándares de una era de excesos neoliberales, mientras el nivel de vida de los más desfavorecidos roza lo precario. Durante más de una década periodistas y académicos han sugerido que la ira creciente, generada por una desigualdad que va en aumento, podría producir graves levantamientos sociales.

En su *Myth of the Social Volcano*, el sociólogo estadounidense Martin Whyte pone en entredicho este pronóstico. Basándose en una encuesta realizada a nivel nacional, Whyte afirma que, aunque los chinos consideran que las desigualdades han aumentado mucho, les preocupa menos que a las personas de otros países. En general no suelen resentir las desigualdades generadas por una libre competencia justa; no creen que sea motivo para levantar barricadas. A lo largo de una vida académica de más de cuarenta años, el mismo Whyte se ha distanciado de las barricadas. Cuando empezó a investigar en China, a finales de la década de 1960, no se hizo eco ni del anticomunismo propio de la Guerra Fría defendido por muchos académicos mayores ni del entusiasmo por ese experimento denominado Revolución Cultural propio de las cohortes más jóvenes. En

---

\* Martin King Whyte, *Myth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and Distributive Injustice in Contemporary China*, Stanford, Stanford University Press, 2010, 250 pp,

esta obra ni celebra la vía de reformas emprendida por el PCC, ni preciniza su caída inminente. En cambio, aplica a China los métodos e intereses de los sociólogos norteamericanos, realizando un estudio-encuesta sobre el trabajo, la familia y la vida cotidiana. En las décadas de 1960 y 1970, cuando no se permitía a los investigadores occidentales realizar trabajo de campo en China, hizo un buen análisis, extrapolando la información obtenida en entrevistas y encuestas hechas a los inmigrantes de Hong Kong. Sus primeros libros, *Small Groups and Political Rituals in China* (1974), *Village and Family in Contemporary China* (1978) y *Urban Life in Contemporary China* (1984) –los dos últimos en coautoría con William Parish–, siguen siendo clásicos sobre la sociedad china en tiempos de Mao y principios de la era post-Mao. Más recientemente, Whyte ha editado una colección sobre desigualdades entre los núcleos urbanos y las zonas rurales, *One Country, Two Societies* (2010) y ha realizado una labor de investigación académica «a la occidental» pionera en el interior de China.

Este volumen presenta el primer intento de realizar una encuesta a nivel nacional. Es 2004 y se centra en un tópico de gran importancia. Nadie niega que el incremento en los coeficientes de Gini tiende a generar revoluciones, y no cabe duda de que la desigualdad económica y lo que la gente piensa sobre ella desempeña un papel fundamental en las revueltas sociales. Whyte incluye en su encuesta a dos mil trescientos individuos que formaban parte de una muestra al azar diseñada para representar al conjunto de la población urbana y rural. Aunque en la China actual las encuestas sean algo habitual, éste probablemente sea el esfuerzo más sistemático realizado hasta el momento para estimar las percepciones de la gente en torno a la injusticia distributiva. Whyte utiliza como sustrato para componer once cortos capítulos lo que califica de «el punto de vista convencional», la idea de que quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad china se muestran cada vez más descontentos con la desigualdad económica. En su opinión, los resultados de las encuestas muestran algo muy diferente. Primero explica los resultados generales aceptando que la mayoría de los encuestados considera excesiva la desigualdad en los ingresos. Pero se apresura a añadir que, según el estudio, la mayoría también piensa que el sistema es justo en términos generales. La gente no parece resentir la competitividad de los mercados y está dispuesta a tolerar las desigualdades que genera.

Cuando se pregunta a los encuestados por los diversos factores que generan diferencias en los ingresos y la riqueza, la mayoría indica que cree que la gente se enriquece gracias a una buena educación, trabajo duro y ciertas habilidades. De manera que quien no hace dinero es por falta de capacidad, esfuerzo, educación o carácter, y la mayoría de los encuestados considera que la desigualdad económica se debe básicamente al mérito y no a privilegios injustos. Según Whyte, lo que más criticaban los encuestados eran residuos de la era del socialismo de Estado, como el acceso privilegiado de dirigentes y funcionarios o las restricciones para los parti-

culares registrados en las zonas rurales del sistema *bukou*. De ahí que sugiera que, a medida que las reformas económicas acaben con estos restos del pasado, la gente se preocupará aun menos por las causas de la desigualdad. En su opinión «carecemos de pruebas que indiquen que la mayoría de los chinos tengan recelos sobre la sociedad de mercado en la que tienen que trabajar».

Al comparar los datos de estas encuestas con los de otros países capitalistas avanzados y países exsocialistas, Whyte llega a la conclusión de que la población china está relativamente contenta. Si bien el 72 por 100 de los encuestados consideraba que las diferencias salariales son excesivas en China, la cifra es más baja que en la mayoría del resto de los países. (Los más satisfechos eran los estadounidenses, sólo un 65 por 100 creía que la desigualdad en los ingresos era excesiva. Los menos satisfechos resultaron ser los búlgaros, donde un 96 por 100 se quejaba de las desigualdades en los ingresos.) Lo que más interesa a Whyte es comparar la medida en que unos y otros creen que el sistema es justo. En su opinión los chinos «consideran que las diferencias entre ricos y pobres se deben mucho más al mérito y en mucha menor medida a la existencia de una estructura social injusta que los ciudadanos de otros países». De hecho, estas encuestas demuestran que los chinos se muestran muy de acuerdo con las afirmaciones que achacan la desigualdad al mérito y justifican la competitividad de los mercados. Admite que sus datos no explican este resultado, pero sugiere que puede ser una reacción ante las duras políticas implementadas bajo el estandarte del igualitarismo en tiempos de Mao. En cambio, los datos de Rusia y Bulgaria son de 1996, cuando las divergencias en los ingresos eran recientes y especialmente acusadas.

En la segunda parte de su libro, Whyte vuelve a China para comparar las actitudes de diversos sectores de la población. Aunque el descontento no sea algo generalizado, sostiene que es inusualmente fuerte en el seno de miembros de grupos clave y que el potencial para los levantamientos sociales puede ser importante. Cree que influyen muchas variables, como el género, la edad, la educación, el estado civil, la etnia, los ingresos, la militancia en partidos, la localización geográfica y la experiencia personal, pero le interesa sobre todo el factor ocupacional. Sin embargo, el complicado conjunto de datos que maneja no parece dar pie al optimismo, pues llega a la conclusión de que «la insatisfacción generada por la desigualdad no se concentra en un grupo o región específicos», resultado que resume como sigue:

Se suele asumir que los encuestados chinos de estatus bajo o que no han podido competir para obtener los beneficios de las reformas, pertenecientes a diversos grupos y regiones, están insatisfechos, mientras que los que gozan de un estatus superior o se han beneficiado desproporcionadamente de las reformas se muestran satisfechos con los patrones de desigualdad actuales. En cambio hallamos que el estatus objetivo actual no es un buen indicador de las actitudes hacia la desigualdad.

El hallazgo más importante de este estudio es que los habitantes del campo se muestran más satisfechos con la equidad del orden existente que los de la ciudad, a pesar de que los primeros ostentan el estatus social más bajo y, en general, son mucho más pobres que los segundos. Según Whyte, los encuestados en las zonas rurales favorecen el libre mercado y no suelen apoyar medidas gubernamentales tendentes a rebajar la desigualdad. Esta satisfacción expresada por los habitantes del campo es la clave que ha permitido a Whyte llegar a la conclusión de que la China actual no es un volcán a punto de estallar.

Whyte reúne un cuerpo de datos impresionante y muy informativo. Pero los resultados admiten interpretaciones diferentes a la suya y conclusiones menos sangrantes. En primer lugar, ¿acaso las respuestas a la encuesta sobre desigualdad dan cuenta del grado de satisfacción con el *statu quo* como cree Whyte? Como ya hemos señalado, un 72 por 100 de los encuestados creía que la desigualdad en los ingresos era excesiva y más del 60 por 100 se mostraba de acuerdo con la aseveración: «En los últimos años los ricos de nuestra sociedad se han hecho más ricos, mientras que los pobres hoy son más pobres.» Además, más de la mitad se mostró de acuerdo con la afirmación: «Las desigualdades sociales persisten porque benefician a los ricos y poderosos», algo con lo que sólo se mostró en desacuerdo menos del 19 por 100 de los encuestados; lo que indica que, en general, el sistema no se considera tan justo. La mayoría también cree que la creciente desigualdad amenaza al orden social, algo con lo que sólo está en desacuerdo el 15 por 100. Puede que estas respuestas no hagan temer una erupción popular inminente, pero nadie debería calificar de mito a la metáfora del «volcán social».

Los datos que nos ofrece Whyte sobre las diferentes actitudes entre los diversos grupos sociales se basan en la correlación estadística e indican la probabilidad de que los encuestados que pertenecen a determinada categoría estén de acuerdo en afirmaciones concretas, en comparación con la probabilidad media de que haya acuerdo entre los encuestados pertenecientes a otras categorías. Los grupos ocupacionales encuestados proceden tanto de áreas rurales como urbanas y cubren todo el panorama social: de inmigrantes a gerentes, de granjeros a trabajadores urbanos autónomos, trabajadores especializados, no especializados, obreros manuales o del sector servicios así como parados. Al analizar los datos, el patrón más claro es el de las diferencias existentes entre los trabajadores de la ciudad y los del campo. La mayoría de los trabajadores agrarios estaban de acuerdo con la siguiente propuesta: «El método más justo consiste en distribuir la riqueza y los ingresos de forma igualitaria» pero, aun así, se quejaban poco sobre el sistema de distribución actual. Por otro lado, aunque la mayoría de los habitantes de las ciudades se mostraban en desacuerdo con estos principios de igualdad, les preocupaba mucho la forma real de distribución de los ingresos y la riqueza. Los que están en la cima de las jerarquías urbanas creen que el orden existente es injusto, mientras que sólo pocos habitantes del campo opinan lo mismo. ¿Qué cabe deducir de estos modelos? Y sobre todo, ¿cómo casa la aparente satisfacción de los habitantes de las zonas rurales con el orden distributivo existente?

La clave es la distribución de la propiedad. Aunque en las encuestas de Whyte no se mencione la tierra, podemos inferir que los habitantes de las zonas rurales piensan sobre todo en ella. Cuando el Partido Comunista decidió descolectivizar la agricultura, a principios de la década de 1980, tuvo buen cuidado de distribuir la tierra de forma igualitaria entre los hogares rurales. Para ello se basó en la renta *per capita*, respondiendo así al fuerte sentido tradicional de la justicia de los campesinos chinos. En las décadas subsiguientes muchos pueblos continuaron distribuyendo periódicamente las tierras entre las familias atendiendo a los cambios en la composición familiar, aunque el Estado ya hubiera prohibido esta forma de distribución. Creo que lo que sugiere la encuesta de Whyte es que los campesinos chinos creen firmemente que la tierra ha de distribuirse de forma igualitaria. Por otro lado, las respuestas de los residentes del campo a las preguntas de Whyte, parecen indicar que existe la creencia generalizada de que, cuando alguien tiene la porción de tierra que le corresponde, su destino depende de sí mismo. Tienden a responder positivamente a aseveraciones como la siguiente: «En nuestro país, el trabajo duro siempre es recompensado», o: «Que una persona se haga rica o sea pobre es responsabilidad suya».

La China rural sigue siendo el ámbito de los cultivos de subsistencia y las pequeñas empresas. Las restricciones legales impuestas a la venta y arrendamiento de tierras han limitado la concentración parcelaria y la reconversión de tierra agrícola para otros usos. Esto ha protegido la sostenibilidad de las familias campesinas asegurando su acceso a pequeñas parcelas. Si bien estas restricciones han perdido fuerza en los últimos años, siguen garantizando una distribución bastante igualitaria de la tierra en los pueblos. Además, una vez eliminadas las restricciones, la supresión de los negocios privados durante la era de Mao ha dejado vía libre a la creación de empresas. En las zonas rurales han surgido muchas empresas familiares a las que se protege de diversas formas de las grandes corporaciones. En este escenario no resulta sorprendente que los encuestados de las zonas rurales de Whyte afirmen que la competencia del mercado es justa, pero no debemos olvidar que esta percepción depende, en primer lugar, de una distribución igualitaria de la tierra. Esta es la razón por la que China destaca en la comparación multinacional establecida por Whyte. Si la comparamos con otros países de la muestra, China tiene una población rural mucho mayor y un sistema único de tenencia de tierras que garantiza, como en ningún otro lugar del mundo, su distribución igualitaria.

Las condiciones de la China urbana son muy diferentes. La mayoría de la gente trabaja para empresas relativamente grandes u otras instituciones importantes, y existe muy poca tradición de una división igualitaria de la propiedad. En este contexto, probablemente resultara utópica la pregunta sobre la distribución igualitaria de la riqueza. Por otro lado, en la ciudad las jerarquías son mucho más acusadas que en las zonas rurales y la reciente acumulación de inmensas fortunas por parte de los ejecutivos de las corporaciones públicas y privadas, causa gran indignación pública. De manera

que apenas puede sorprender que los habitantes de las ciudades, al contrario que la gente del campo, no expresen su apoyo al principio de la distribución igualitaria de la propiedad, ya que lo que les preocupa es la distribución real de la riqueza. Los encuestados de los estratos urbanos inferiores eran los más insatisfechos. No es cierto, como afirma Whyte, que «los patrones de desigualdad actuales no parezcan crear grupos de insatisfechos identificables». Al revés, sus datos demuestran que la gran mayoría de los trabajadores especializados y no especializados, los parados de las ciudades y otros trabajadores urbanos están de acuerdo con toda pregunta de la encuesta que expresa insatisfacción con el orden de distribución actual. Aunque en el libro no se agrupa a los individuos por categorías profesionales, sabemos que la mayoría de los encuestados creían que la creciente desigualdad en los ingresos se debía a que los ricos y poderosos se estaban lucrando, y también que los grupos profesionales situados en la base de las jerarquías urbanas tendían en mucha mayor medida que los demás a expresar esta idea. De ahí que podamos inferir que prolifera la insatisfacción en los barrios obreros de las ciudades chinas.

De hecho no resulta sorprendente que los trabajadores urbanos estén menos satisfechos que los campesinos con el resultado de las reformas económicas, puesto que ambos grupos las han vivido de manera muy diferente. La descolectivización dio a cada familia campesina su propia parcela de tierra, garantizando la subsistencia de los habitantes del campo y convirtiéndoles en empresarios. En cambio, la privatización y reestructuración de las empresas estatales dejó a los trabajadores de las ciudades con las manos vacías. En el pasado, aunque los trabajadores no fueran propietarios de las fábricas en las que trabajaban, «poseían» sus empleos, en el sentido de que no se les podía despedir y tenían garantizado su sustento. Ya no es así. Tras la reestructuración de las empresas públicas unos sesenta millones de trabajadores, más de la mitad de la fuerza de trabajo original, han perdido sus puestos de trabajo y, los que lo conservan, han perdido la seguridad en el empleo. En las investigaciones que he realizado a lo largo de los últimos cinco años, he entrevistado a trabajadores del sector industrial en declive del norte y centro de China, muchos de ellos parados. Los que entrevisté se mostraban indignados por la desigualdad generada por las reformas y estaban convencidos de que muchos otros compartían su ira. Las cifras de Whyte demuestran que esto no es enteramente cierto, ya que la mayor parte de la población rural y los estratos superiores de la población urbana se muestran bastante satisfechos. Sin embargo, sus datos no consiguen diluir la impresión, confirmada por mis entrevistas, de que en las comunidades obreras de las ciudades existe una enorme sensación de injusticia. La privatización ha sido causa de mucho resentimiento, muchos trabajadores se lamentan de que empresas que eran de propiedad pública y han ayudado a levantar, sean hoy la propiedad privada de un puñado de gerentes de elite o inversores extranjeros. De manera que la propiedad es esencial en el caso de las perspectivas sobre justicia distributiva. En la China rural, el punto de referencia crucial es la distribución de la tierra, en la China urbana lo es la propiedad públi-

ca. Hubiéramos podido obtener mucha información si la encuesta hubiera incluido preguntas sobre estas cuestiones clave. Desafortunadamente Whyte no lo tuvo en cuenta.

Como cabía esperar, algunos de los trabajadores inmigrantes que respondieron a la encuesta de Whyte tenían más en común con los habitantes de las zonas rurales y, otros, con los obreros de las ciudades. Como los agricultores, suscribían el principio de distribución igualitaria y creían contar con muchas posibilidades de ascenso social. Pero, al contrario que ellos (y como los obreros de las ciudades) percibían el orden existente como injusto y excesivamente desigualitario. En 2004, los encuestados eran miembros de la segunda generación de trabajadores de la era de las reformas. Lo que interesaba a los de la primera generación, al igual que a sus homólogos en otras zonas y épocas, era ganar dinero para volver a su pueblo, construir una casa y crear una familia. Los miembros de la segunda generación ven poco futuro en el pueblo e intentan encontrar una forma de sobrevivir en la ciudad. Conocen mucho mejor la realidad urbana y se muestran muy críticos con las desigualdades a las que se enfrentan. De hecho, de todos los encuestados por Whyte, son los que se muestran más preocupados por la medida de la desigualdad.

Si los habitantes del campo se mostraban menos insatisfechos que los obreros de las ciudades o los inmigrantes cuando Whyte realizó su encuesta, la situación puede haber cambiado. Como él mismo señala, en 2004 los campesinos tenían motivos para estar contentos con los recientes cambios: se acababan de eliminar los impuestos a la agricultura y otras tasas en el marco de unas políticas que beneficiaban enormemente a las familias de agricultores. Sin embargo, en estos últimos años, el Estado ha empezado a promocionar una rápida urbanización y la agricultura a gran escala; una deriva que amenaza con acogotar doblemente a la economía doméstica de los campesinos, que dependen de su acceso a la tierra. En primer lugar, la urbanización se está comiendo los pueblos, a menudo por medio de tratos turbios que enriquecen a los funcionarios locales y promotores urbanísticos a expensas de los residentes. En segundo lugar, se está experimentando de diversas formas con la posibilidad de poner la tierra en manos de la industria agroalimentaria. Puede que esto último sea una amenaza mayor para la autonomía de la economía campesina que la urbanización, aunque aún se dedique poca tierra a operaciones agrícolas a gran escala. Más de cuarenta millones de campesinos se han visto desplazados y entre tres y cuatro millones pierden sus tierras cada año. Cuando esto sucede suelen protestar, como ocurrió en el caso del violento levantamiento de Wukan en la provincia de Guangdong en el otoño de 2011 y en muchos otros lugares. Su fiera resistencia a dejarse arrebatar las tierras es la otra cara de la moneda de su satisfacción relativa con el orden de distribución actual; ambas se basan en su fe en la distribución justa de la tierra.

Si reinterpretamos los resultados de la encuesta de Whyte desde este punto de vista, puede que el futuro no parezca tan pacífico como él prevé. Sus

conclusiones se basan en la siguiente lógica: como las principales causas de la desigualdad que genera insatisfacción en la República Popular China son residuos del socialismo de Estado (las restricciones *bukou* o los privilegios oficiales), y dado que los que ocupan los estratos más bajos de la sociedad (los campesinos) se muestran a favor de la economía de mercado y la desigualdad que genera, las sucesivas reformas disiparán, en vez de fomentar, la sensación de injusticia distributiva. Yo en cambio sugiero lo contrario. Hasta ahora, las reformas económicas han creado en las ciudades chinas una versión muy dura de capitalismo y difundido la indignación entre los trabajadores urbanos y los inmigrantes, dejando a la China rural a niveles de subsistencia y fomentando allí las pequeñas empresas familiares creadas tras una distribución igualitaria de la tierra. Este es el contexto que dan los datos de la encuesta de Whyte. Explica la satisfacción relativa de los habitantes del campo con el orden distributivo. Pero si se mina la distribución igualitaria de las tierras y se erosiona el fundamento de la subsistencia de los campesinos y sus empresas (como sucederá inevitablemente si el capitalismo se sigue cebando en el campo), no cabe duda de que la insatisfacción crecerá en las zonas rurales.

Evidentemente, que esta insatisfacción desemboque o no en una revuelta depende de muchos factores políticos y económicos. Como bien señala Whyte, todo depende de si la economía china sigue creciendo tan rápidamente como en las últimas décadas. A pesar de las flagrantes desigualdades, las altas tasas de crecimiento permiten cubrir sus necesidades incluso a aquellos cuya subsistencia se ha vuelto precaria. De todos los encuestados por Whyte, el 63 por 100 creía que el nivel de vida de su familia se elevaría en los cinco años siguientes y sólo menos del ocho por 100 pensaba que empeoraría. Sin duda, este optimismo respecto del futuro atempera hasta la mayor amargura generada por la creciente desigualdad. Sin embargo, el sorprendente crecimiento que se viene registrando desde principios de la década de 1990 empieza ralentizarse. Si sigue haciéndolo habrá mucho resentimiento capaz de desatar revueltas sociales. Es lo que muestran los datos del estudio de Whyte, aunque él no llegase a esta conclusión.